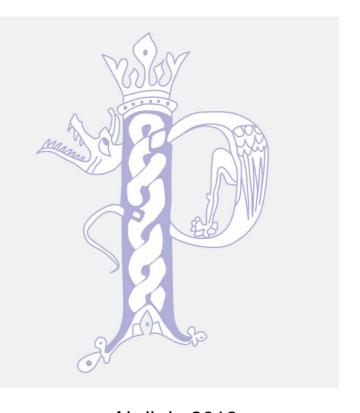


Renta garantizada e Inclusión social (2016-2018)



Abril de 2019



www.camaradecomptos.org



ÍNDICE

	PÁGINA
I. Introducción	3
II. RENTA GARANTIZADA E INCLUSIÓN SOCIAL	5
III. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES	12
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	14
IV.1. Opinión	14 15 21 24
ANEXO I. FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO CONCESIÓN RENTA GARANTIZADA	32
ANEXO II. FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN	33
ANEXO III. SOLICITUDES DE RENTA GARANTIZADA 2016-2018	34
ANEXO IV. SOLICITUDES DE RENTA GARANTIZADA 2016-2018 SERVICIO SOCIAL DE BASE	35
ANEXO V. BENEFICIARIOS DE RENTA GARANTIZADA SERVICIO SOCIAL DE BASE	36
ALEGACIONES FORMULADAS AL INFORME PROVISIONAL	37
CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL INFORME PROVISIONAL	





I. Introducción

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el día 29 de enero de 2018 acordó, a propuesta del grupo parlamentario Partido Socialista de Navarra, solicitar a la Cámara de Comptos de Navarra la emisión de un informe de fiscalización sobre la aplicación de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada.

El 31 de enero se registró en la Cámara de Comptos la petición parlamentaria que expresamente solicitaba:

- "Analizar el cumplimiento, en términos de eficacia y eficiencia, el objeto y la finalidad previstos en el artículo 1 de la Ley Foral 15/2016.
- Revisar y analizar en cuántos casos se ha suspendido la prestación por encontrar un trabajo. Y en cuántos se ha desarrollado el itinerario personalizado de inclusión social diseñado y desarrollado en cada uno de ellos para el titular y la familia perceptora.
- Estimación del tiempo medio de percepción de la Renta Garantizada. Por tramos (Más de cinco años, entre dos y cinco años y menos de dos años)
- Analizar el porcentaje de personas que retoman la prestación tras un proceso de inclusión social y acompañamiento social y sin él.
- Analizar la coordinación existente entre los Servicios Sociales de Base, los Servicios de Empleo y administraciones y organizaciones encargadas de la gestión tanto de la tramitación de la Renta garantizada como de los procesos de acompañamiento social y/o laboral. Qué mecanismos de coordinación existen y su eficacia.
- Análisis y evaluación de los mecanismos de control e inspección establecidos por el Gobierno de Navarra para el fiel cumplimiento de los objetivos de la ley."

Este trabajo se incorporó en el programa anual de fiscalización que la Cámara de Comptos aprobó para el año 2018 y fue realizado entre el mes de noviembre de 2018 y marzo de 2019, por un equipo integrado por dos técnicas de auditoría y una auditora con la colaboración de los servicios jurídicos, informáticos y administrativos de la Cámara de Comptos.

El informe se estructura en cuatro epígrafes, incluyendo esta introducción; en el segundo se describen los derechos de renta garantizada (en adelante, RG) e inclusión social (en adelante, IS); el tercero contiene los objetivos y alcance del trabajo y el cuarto y último, expone las principales conclusiones y recomendaciones. Además, incluye cinco anexos con los flujogramas descriptivos de los procedimientos de concesión e inspección e información sobre las solicitudes, beneficiarios y evolución de las ayudas por RG.





Los resultados de esta actuación se pusieron de manifiesto al vicepresidente y consejero de Derechos Sociales y a la directora general de Inclusión y Protección Social del Gobierno de Navarra, para que formulasen, en su caso, las alegaciones que estimasen oportunas, de conformidad con lo previsto en el art. 11.2 de la Ley Foral 19/1984, reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra. Transcurrido el plazo fijado, se presentaron alegaciones que se incorporan al informe.

Agradecemos al personal del Departamento de Derechos Sociales la colaboración prestada en la realización del presente trabajo.





II. Renta Garantizada e Inclusión social

La Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, regula los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada. Esta ley introduce en el sistema de protección social de Navarra el modelo de doble derecho: el derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad y el derecho subjetivo a una RG, como prestación destinada a cubrir las necesidades básicas de las personas que, reuniendo determinadas circunstancias, carecen de capacidad económica para ello.

El Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril de 2018, desarrolla reglamentariamente los derechos a la IS y a la RG.

Renta garantizada

La RG es una prestación básica, económica y periódica destinada a las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Es complementaria y subsidiaria de cualquier otra prestación económica a que se tenga derecho.

• Titulares del derecho.

Tienen derecho a la RG las personas que cumplen los siguientes requisitos:

- a) Ser mayor de 18 años o menor emancipado con menores a su cargo. En el caso de tener entre 18 y 24 años sin menores a cargo, deberá haber vivido de forma independiente durante al menos dos años antes de la solicitud de la RG.
- b) Residir en la Comunidad Foral de Navarra al menos con dos años de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, o un año en el caso de que en la unidad familiar hubiera menores o personas dependientes o con discapacidad igual o superior al 65 por ciento.
- c) Carecer de medios suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Se considera que existe esta carencia cuando su capacidad económica es inferior a la cuantía de la RG que pueda corresponder a la unidad familiar.
- d) Haber solicitado previamente a las Administraciones Públicas las prestaciones, pensiones o subsidios que pudieran corresponderle.
 - Unidad perceptora, unidad familiar y núcleo familiar.

A efectos de esta ley se considera:

a) Unidad familiar: la formada por la persona solicitante y, en su caso, la que conviva con ella unida en una relación conyugal o análoga relación de afectividad, así como las personas que convivan y mantengan con aquella una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad (incluidas personas en acogimiento familiar o guarda legal) o hasta el primero de afinidad. Las unidades familiares podrán estar compuestas de uno o varios núcleos familiares.





b) Núcleo familiar: el formado por la persona solicitante, en su caso con su cónyuge o persona con quien mantenga análoga relación de afectividad, y sus hijos e hijas convivientes (incluidos menores en acogimiento familiar).

Con carácter general, la unidad familiar es la perceptora de la RG y le corresponde una única prestación. Excepcionalmente se podrán percibir dos rentas garantizadas cuando existan varios núcleos familiares en la misma unidad familiar y alguno de ellos incluya menores o a personas dependientes o con una discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Si en un mismo domicilio conviven dos o más unidades familiares cada una tendrá derecho a percibir una RG, con un máximo de tres rentas en dicho domicilio.

• Cuantías.

Las cuantías máximas mensuales a percibir por unidad familiar en función de su número de miembros, en los años 2016 (a partir de noviembre), 2017 y 2018 son:

Nº personas de la unidad familiar	% adicional	Cuantía adicional nov.2016/2017	Límite cuantía máx. nov.2016/2017	Cuantía adicional 2018*	Límite cuantía máx. 2018
Una persona	-	-	600	-	610,80
Dos personas	35	210	810	213,78	824,58
Tres personas	25	150	960	152,70	977,28
Cuatro personas	15	90	1.050	92,00	1.068,90
Cinco personas	15	90	1.140	92,00	1.161,52
Seis personas o más	15	90	1.200**	92,00	1.221,60**
Importe máximo			1.200		1.221,60
Importe mínimo garantizado)		60		61,08

^{*}Incremento 1,8 por ciento para 2018. Orden Foral 21/2018, 1 de febrero

• Capacidad económica que da derecho a la prestación.

La capacidad económica de la unidad familiar debe reunir las siguientes condiciones:

- a) Los ingresos económicos de la unidad familiar de los últimos seis meses, incluido el de la solicitud, serán inferiores a la cuantía de la RG que pudiera corresponderle en cómputo semestral, en función de los miembros computables de la unidad familiar en el momento de la solicitud.
- b) El valor de todos los bienes muebles debe ser igual o inferior al 65 por ciento de la cuantía de RG para una unidad familiar de un solo miembro, en términos anuales. Es decir, igual o inferior a 4.680 euros en 2017 y a 4.764 euros en 2018.
- c) El valor de los bienes inmuebles será igual o inferior a diez veces la cuantía correspondiente de RG por una unidad familiar de un solo miembro, en términos anuales. Es decir, igual o inferior a 72.000 euros en 2017 y a 73.296 en 2018.





La cuantía mensual de la prestación aplicable a la unidad familiar se determina por la diferencia entre la cuantía de la RG calculada según el número de miembros y el valor de los ingresos mensuales computables de los miembros de dicha unidad familiar, deducidos, en su caso, los estímulos al empleo.

• Estímulos al empleo.

Determinada la capacidad económica de la unidad familiar, para calcular la cuantía de RG se excluye del total de recursos disponibles una parte de los rendimientos de las actividades laborales de los miembros de la unidad perceptora conforme a la siguiente fórmula:

Renta Garantizada =
$$\left\{ (A \times RG_1) + \left\{ B \times \left[\left(\frac{Ingresos}{100} \right) - \frac{\frac{1}{2} \times RG_1}{100} \right] \right\} \right\} - Ingresos$$

Siendo RG₁ el valor de la RG de un solo miembro, A el factor corrector de 0,50 sobre los incrementos según los miembros de la unidad familiar y B el parámetro de progresividad de la exención de valor 10, que podrá ser actualizado anualmente junto con la actualización de las cuantías de RG de un miembro.

Con la finalidad de incentivar la incorporación socio-laboral, existen otros mecanismos que pueden afectar a la cuantía de la RG como son los incentivos en contratos laborales subvencionados y la suspensión temporal de la prestación por incorporación laboral¹.

• Periodo de percepción.

La RG tendrá con carácter general una duración de doce meses, renovables por periodos de igual duración, mientras continúe la situación de necesidad.

• Obligaciones de los perceptores.

Las unidades familiares perceptoras de RG deberán cumplir, durante todo el periodo de percepción de la prestación, las siguientes obligaciones:

- a) Residir de forma efectiva y continuada en Navarra.
- b) Hacer valer todo derecho de contenido económico que pudiera corresponderle tanto a la persona solicitante como a cualquiera de los miembros de la unidad familiar.
- c) Estar disponibles, para las ofertas de empleo adecuado, todas las personas perceptoras en edad laboral aceptándolas cuando se produzcan, salvo cuando se trate de personas que no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral ni a un empleo protegido.

¹ Párrafo incluido de acuerdo con la alegación segunda.



- 7 -



Dichas personas deberán estar inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL en adelante), salvo aquéllas personas que se encuentren en situación administrativa irregular.

- d) Participar en las actividades de inserción socio laboral que los servicios sociales de base (en adelante, SSB), servicios sociales especializados o servicios de empleo les propongan.
- e) Comunicar cualquier cambio de domicilio habitual y de las circunstancias de la unidad perceptora que se hayan tenido en cuenta para la concesión de la RG, en el plazo de quince días hábiles desde que se produzcan tales cambios.
 - f) Reintegrar los abonos percibidos indebidamente.
 - Ejercicio conjunto con el derecho de IS.

A las unidades familiares solicitantes por primera vez de la RG se les informa y orienta para que puedan ejercer su derecho a un proceso personalizado de IS. Ejercerán conjuntamente los derechos a la RG y a la IS en los siguientes supuestos:

- a) Con carácter voluntario, cuando la unidad familiar de la persona solicitante se encuentre en situación de exclusión social y desee iniciar el ejercicio del derecho a la IS.
- b) Con carácter obligatorio, las unidades familiares perceptoras de RG durante un año ininterrumpido sin modificación en su renta; las perceptoras de RG por un periodo continuo de al menos veinticuatro meses, las que se encuentren en situación de exclusión social grave y se les conceda la RG de manera excepcional; las que residiendo temporalmente en recurso de acogida temporal de servicios sociales o socio sanitarios, inicien el proceso de desinstitucionalización; y las personas que se encuentren en tercer grado penitenciario y participen en un programa específico de incorporación social.
 - Supuestos específicos de acceso a RG.

Excepcionalmente, podrá concederse RG, aun no reuniendo los requisitos que dan derecho a esta, a las personas en situación de necesidad por exclusión social grave y a las personas que, aun teniendo cubiertas sus necesidades básicas, estén residiendo en recursos de acogida temporal de servicios sociales o socio sanitarios y sirva para favorecer su proceso de desinstitucionalización.

Inclusión social

El derecho a la IS es un derecho de todas las personas con residencia en Navarra que se encuentran en situación de exclusión social.

Se entiende por exclusión social aquella situación, consecuencia de diversos déficits o carencias personales, relacionales, laborales o socio ambientales, que persisten en el tiempo y que impiden o limitan el ejercicio y disfrute efectivo de sus derechos.





La responsabilidad de las Administraciones Públicas de Navarra es garantizar el derecho de las personas a ser apoyadas en su proceso de IS, según un itinerario personalizado. Por ello, el Gobierno de Navarra ha aprobado, por Acuerdo de Gobierno de 20 de junio de 2018, el Plan Estratégico de IS 2018-2021, aunque según la Disposición Adicional cuarta de la Ley Foral 15/2016 debió aprobarse antes del 19 de mayo de 2017.

El procedimiento de IS se inicia, con carácter general, a solicitud de la persona interesada, informada por los SSB, y se desarrolla en varias fases:

- Co-diagnóstico social de su situación personal y familiar. Esta valoración determina la situación de la persona en inclusión social, riesgo de exclusión social o situación de exclusión social en grado leve, moderado o grave.
 - Propuesta de programa personalizado de IS.
- Firma del convenio de IS entre SSB o equipo de incorporación socio-laboral y persona solicitante y otros miembros de la unidad familiar.
 - Realización del programa.
 - Seguimiento, evaluación y reorientación del mismo.

Evolución del gasto en el periodo 2010-2018

La evolución del gasto por las ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia en los años 2010-2018, con su denominación propia en cada momento, renta básica (RB), renta de inclusión social (RIS) o RG, y su regulación específica en cada caso, es la siguiente:

Ejercicio	Denominación	Presupuesto inicial	Obligaciones reconocidas	Porcentaje Ejecución	Porcentaje Variación	Porcentaje Acumulado
2010	Renta básica	15.000.000	30.829.764	206	-	-
2011	Renta básica	29.165.929	35.870.357	123	16%	16
2012	Renta de inclusión social	17.000.000	31.532.856	185	-12%	4
2013	Renta de inclusión social	30.291.282	39.364.238	130	25%	29
2014	Renta de inclusión social	36.216.108	50.994.902	141	30%	59
2015	Renta de inclusión social	37.002.080	65.801.708	178	29%	88
2016	Renta de inclusión social	57.000.000	83.033.506	146	26%	114
2017	Renta garantizada	91.961.852	98.151.920	107	18%	132
2018	Renta garantizada	96.809.649	103.677.9242	107	6%	138

^{*}Esta partida presupuestaria incluye hasta 2016 tres prestaciones: RB/RIS/RG, ayudas para la integración familiar y social (AIES) y ayudas extraordinarias para la inclusión social (AEI), aproximadamente un cuatro por ciento. A partir de 2016 incluye RG y AEI.

² Importe obligaciones reconocidas a 31.12.2018. Cuentas Generales Administración de la Comunidad Foral de Navarra 2018 no aprobadas.



-



El gasto se ha incrementado un 138 por ciento en el periodo 2010-2018 alcanzando, aproximadamente, los 104 millones de euros. En todos los ejercicios del periodo la ejecución ha sido superior al presupuesto aprobado.

Evolución cuantías RIS/RG miembros de la unidad familiar (2014-2018)

La evolución de las cuantías de RIS/RG por número de miembros de la unidad familiar en el periodo 2014-2018 y su comparación con el salario mínimo interprofesional (SMI en adelante) es la siguiente:

Nº miembros U.F.	Año 2014	Año 2015		Año 2016		Año 2017	Año 2018*
Normativa RIS/RG	LF 36/2013, 2	3, 26 noviembre LF 6/2015		I5, 5 marzo LF 1		5/2016, 11 noviembre	
1 miembro	549	551	649	655	600	600	611
2 miembros	658	662	778	786	810	810	825
3 miembros	713	717	843	852	960	960	977
4 miembros	768	772	908	917	1.050	1.050	1.069
5 miembros	823	827	973	983	1.140	1.140	1.161
6 o más miembros					1.200	1.200	1.222
SMI	645	649		655		708	736

^{*}Leyes que modifican la Ley Foral 1/2012, de 23 de febrero, que regula la RIS y que actualizan las cuantías de RIS.

En el año 2014, la cuantía de RIS para una unidad familiar de un miembro era del 85 por ciento del SMI, es decir, 549 euros, incrementándose según el número de miembros de dicha unidad familiar en un 20, 30, 40 y 50 por ciento. A partir de abril 2015, la cuantía pasa a ser del 100 por ciento del SMI, con los mismos incrementos adicionales.

La Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, sin referencia al SMI, establece a partir de noviembre de 2016, la cantidad de 600 euros para la unidad familiar de un miembro con incrementos del 35, 25, y 15 por ciento por miembros adicionales de la unidad familiar, hasta un máximo de 1.200 euros.

Normativa aplicable

La normativa aplicable a los derechos de IS y RG es:

- Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por el que se regulan los derechos de IS y a la RG.
 - Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la IS y a la RG.
- Ley Foral 6/2017, de 9 de mayo, de modificación parcial del texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.
 - Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.



^{**}OF 21/2018, 1 de febrero. Actualización de cuantías para 2018.



- Decreto Foral 69/2008, 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general.
- Decreto Foral 33/2010, de 17 de mayo, por el que se establece la zonificación de Servicios Sociales de la Comunidad Foral de Navarra.
- Orden Foral 2/2018, de 1 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se actualiza la cuantía de RG para el año 2018.

Estructura organizativa y personal

La Sección de Garantía de Ingresos y Prestaciones Económicas (SGIPE en adelante), perteneciente al Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo del Departamento de Derechos Sociales, se encarga de la gestión de las ayudas por RG. En esta sección trabajan actualmente una jefa de sección, 18 trabajadoras sociales, dos educadores sociales, cinco administrativos/as y dos auxiliares administrativas.

Además participan en el proceso de gestión los servicios sociales de base {44 SSB y el de Pamplona descentralizado en 12 unidades de barrio (UB)}, la Secretaría General Técnica y la Sección de Inspección del departamento.





III. Objetivos, alcance y limitaciones

Los objetivos de nuestro trabajo, de acuerdo a la petición parlamentaria, han sido los siguientes:

- Emitir una opinión de auditoría de cumplimiento de legalidad en términos de seguridad razonable verificando si la gestión del derecho a la RG se ha ajustado a la normativa aplicable.
- Revisar los procedimientos de concesión, tramitación, control e inspección de las ayudas por RG.
 - Verificar el procedimiento aplicado y su adecuación a la normativa vigente.
 - Analizar las solicitudes de RG desde noviembre de 2016 a diciembre de 2018.
 - Analizar la evolución de las ayudas por RG para el periodo 2016-2018.
- Analizar, para el periodo 2016-2018, en cuántos casos se accede a un empleo percibiendo la prestación, en cuántos se ha suspendido o modificado la prestación por incorporación al mercado laboral y número de unidades familiares que retoman la prestación tras un periodo de suspensión temporal o extinción de la RG.

El ámbito temporal del presente trabajo se extiende desde el 19 de noviembre de 2016, fecha de entrada en vigor de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos de IS y RG, hasta el 31 de diciembre de 2018.

Para realizar nuestro trabajo hemos analizado la siguiente información:

- Normativa aplicable a los derechos a la IS y a la RG.
- Procedimientos y manuales de gestión empleados en la concesión, gestión y control e inspección de los derechos a la IS y a la RG.
- Documentación acreditativa de los controles realizados por la SGIPE en el mes de diciembre de 2018 para la comprobación de los requisitos de acceso, valoración económica y modificaciones de las ayudas de RG con efecto en la nómina de enero 2019.
- Informe de Control financiero permanente realizado por el Servicio de Intervención del Gobierno de Navarra años 2016 y 2017, sobre ayudas económicas directas reguladas como prestaciones garantizadas.

Por otro lado, queremos señalar algunos aspectos relacionados con la petición parlamentaria recibida:

• El alcance de nuestro trabajo no comprende el análisis del cumplimiento del artículo 1 de la Ley Foral 15/2016 con respecto al derecho a la IS ya que para la verificación del mismo se precisaba información no disponible en el departamento. Al respecto, indicamos que por Orden Foral 20/2019, de 25 de enero, publicada en el BON el 20 de marzo de 2019, se ha aprobado la aplicación informática





SIDIS (Sistema de Información del Derecho a la Inclusión Social) que permitirá valorar la exclusión social, elaborar el programa personalizado y el convenio de IS y realizar un seguimiento del mismo.

La obtención de estos datos a través de los SSB habría supuesto un retraso significativo en la emisión de nuestro informe y su publicación.

- La Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, reconoce por una parte, el derecho a la IS y por otra, el derecho a una RG. Por este motivo no hemos calculado el porcentaje de personas que retoman la prestación de RG tras un proceso de inclusión social y acompañamiento social y sin él. Los derechos de IS y RG no son dos derechos secuenciales en el tiempo sino paralelos. Deben estar coordinados, pueden derivar de situaciones económicas y sociales distintas y sus beneficiarios no tienen por qué ser los mismos.
- Obtener la información del tiempo medio de percepción hubiera llevado más tiempo de elaboración y análisis de datos. La información disponible sin ese análisis no refleja adecuadamente la duración de la prestación, al incluir en su cómputo periodos de interrupciones y suspensiones de la RG que desvirtúan su cálculo, motivo por el cual no hemos obtenido dicho indicador.
- En los presupuestos generales de Navarra de los ejercicios 2016 a 2018 no constan indicadores para valorar la gestión de la RIS/RG, a excepción de la inclusión en 2018 de la tasa de cobertura de la RG (% de personas beneficiarias de RG sobre el total de población), si bien no se define un valor objetivo para dicho indicador.

Esto ha supuesto que no hayamos podido valorar la eficacia y eficiencia de la gestión de este derecho, si bien hemos calculado los indicadores señalados en el epígrafe IV.5.





IV. Conclusiones y recomendaciones

IV.1. Opinión

Responsabilidad del Gobierno de Navarra

El Departamento de Derechos Sociales es responsable de la gestión del derecho a la RG.

Además, el departamento debe garantizar que las actividades y operaciones realizadas resultan conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de control interno que considere necesarios para esa finalidad.

Responsabilidad de la Cámara de Comptos de Navarra

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento de la legalidad en relación con la gestión del derecho a la RG en el periodo 2016-2018, basada en nuestra fiscalización.

Para ello, hemos llevado a cabo la misma de conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo, establecido en las ISSAI-ES, aplicándose fundamentalmente la ISSAI-ES 400, referida a las fiscalizaciones de cumplimiento y la ISSAI-ES 300 referida a las fiscalizaciones operativas. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable de que, la gestión del derecho a la RG resulte, en todos los aspectos significativos, conforme con la normativa vigente.

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la normativa durante el periodo fiscalizado.

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos tanto de incorrección material en las partidas presupuestarias, debida a fraude o error, como de incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para garantizar dicho cumplimiento, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría de cumplimiento.





Opinión de cumplimiento de legalidad

En nuestra opinión, la gestión del derecho a la RG correspondiente al periodo 2016-2018 resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable.

IV.2. Revisión del procedimiento de gestión, control e inspección del derecho a la renta garantizada

IV.2.1 Descripción del procedimiento

Constan procedimientos de las distintas fases de la gestión del derecho a la RG. La SGIPE ha elaborado también un dossier de apoyo a la gestión. En resumen, el procedimiento es el siguiente:

Solicitud

El procedimiento se inicia a solicitud de la persona interesada, mediante la presentación de un "formulario de solicitud", según modelo normalizado, en los servicios sociales de base (SSB en adelante) o unidad de barrio (UB en adelante) del municipio de residencia.

Los SSB introducen los datos y escanean la documentación de la solicitud en la aplicación informática TRAMITA³, volcándose los datos al Sistema Integrado de Prestaciones y Servicios Sociales (SIPSS); la fecha de volcado de la documentación es la fecha de registro de la solicitud.

Todos los SSB disponen de la herramienta TRAMITA para recopilar y validar la documentación de las solicitudes, sin embargo no todos la utilizan en todos los expedientes tramitados y siguen utilizando expedientes en papel, que envían por valija al departamento.

Valoración

- Mensualmente, antes de la asignación de las solicitudes a los técnicos para su valoración, se envía un listado con los DNI de los solicitantes a la Hacienda Tributaria de Navarra solicitando información fiscal de los mismos. En un fichero Excel les devuelven información sobre capital mobiliario, inmobiliario, compraventas, etc. para valorar la capacidad económica de las unidades familiares.
- Se comprueba que los datos de la unidad familiar y empadronamiento incluidos en SIPSS coinciden con los justificantes que se presentan.
- Se comprueban los datos de afiliación y pensiones de todos los miembros de la unidad familiar en la base de datos de la Seguridad Social (SS en adelante).

³ Sistema de tramitación transaccional. Herramienta "lanzadera" utilizada por los SSB para introducir los datos de las solicitudes de RG en el SIPSS.





Además, la SS comunica puntualmente, por correo electrónico, las concurrencias de pensiones con RG.

Desde la SS envían dos listados a la SGIPE: el "Listado mensual de concurrencias" y "Concurrencias de prestaciones", que les sirven para confirmar las comunicaciones individuales.

• Al valorar los expedientes, se hacen consultas individuales, a través de SARA⁴, de las cuantías de las prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). También se realizan consultas individuales con este organismo mediante correo electrónico. A través del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP)⁵, tanto la SGIPE como el SEPE tienen acceso a las prestaciones de cada entidad.

De todas las comprobaciones realizadas se deja constancia en el campo "Observaciones" en SIPSS; este campo de texto no permite su explotación.

Realizadas las comprobaciones, si se detectan errores o contradicciones en la documentación presentada o esta debe ser completada, se concede al solicitante un plazo de 15 días hábiles para subsanarla. Completado el expediente el personal técnico elabora en SIPSS, el informe de valoración; el personal administrativo tramita el informe-propuesta de resolución y el Negociado de Asuntos Administrativos de la Secretaría General Técnica elabora la Resolución de concesión.

Controles mensuales para todos los perceptores

• Mensualmente, se prepara un listado con todos los DNI de las personas en edad laboral de los expedientes activos. Este listado se envía a la SS, a través de su web, mediante el sistema PIDO⁶. Al día siguiente desde la SS les devuelven un fichero con las altas del mes solicitado. En la SGIPE comprueban si las altas o modificaciones estaban notificadas o no y, en su caso, se procede a dar de baja, suspensión cautelar, etc.

Este listado se envía también al Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de evaluación de las Políticas Sociales, para conocer la situación de demanda de empleo de las personas en edad laboral ya que disponen de esa información proporcionada por el SNE-NL.

⁶ PIDO: sistema a través del cual las Administraciones Públicas pueden solicitar a la TGSS información sobre situación de cotización, sobre los beneficiarios de ayudas o subvenciones.



⁴ Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones. Conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e instituciones europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios. De implantación obligatoria según el art. 43 de la Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y el art. 13 del RD 4/2010 que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

⁵ El Registro de Prestaciones Sociales Públicas (RPSP) creado en 1994, es una herramienta de gestión al servicio de todas aquellas entidades que gestionan prestaciones de naturaleza pública, cuya titularidad y mantenimiento sea encomendado al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El RPSP tiene por objeto integrar la información de todas las prestaciones públicas a fin de que las entidades que las gestionan puedan tramitar y resolver con agilidad el reconocimiento de las mismas así como controlar las situaciones de concurrencia e incompatibilidad.



La SGIPE y el SNE-NL, al objeto de verificar la disponibilidad para el empleo de todos los perceptores de RG en edad laboral ha establecido un "Protocolo de seguimiento y control de las obligación de mantenerse disponible para el empleo adecuado", actualizado con fecha 25 de octubre de 2018.

En el SNE-NL tienen acceso a una aplicación informática para conocer los perceptores de RG, a los que envían las ofertas de empleo.

- Al objeto de verificar las posibles salidas al extranjero y controlar las ausencias fuera de Navarra, el técnico de valoración envía los DNI dudosos a la Brigada de Extranjería para que les remitan la información requerida. Desde este organismo también les envían o solicitan información sobre perceptores de RG.
- Desde otras unidades administrativas del Departamento de Derechos Sociales y también desde otros departamentos, les comunican cualquier información de utilidad para la gestión de RG: alquiler de vivienda, familia numerosa, ayuda por difícil empleabilidad, etc.
 - Periódicamente, mediante la red SARA vuelcan al sistema de SS los datos de RG.
- Mensualmente vuelcan del SIPSS al RPSP, las altas, bajas y modificaciones producidas.

En el anexo I de este informe se recoge el flujograma del procedimiento de concesión de ayudas por RG.

Renovación

Para la renovación de la RG, el interesado debe presentar la solicitud de renovación el último mes de la prestación.

Se tramita vía SSB y consiste en una declaración responsable, según modelo de solicitud de renovación de RG, suscrita por persona interesada y en la que manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento del derecho a la RG; que dispone de la documentación que así lo acredita; que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida; y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento, así como que no han variado, en el momento de la solicitud de renovación, las circunstancias preexistentes.

Mensualmente la SGIPE comprueba los expedientes que tienen pago ese mes y solicitud de renovación para el mes siguiente, para tramitar su prórroga.

Con el objetivo de evitar mensualidades sin abono de la RG de aquellas personas que solicitan renovación de la prestación, la SGIPE ha establecido un procedimiento de renovación que consta de tres fases; en la fase I se extraen los grupos de edad "mayores de 65 años" y "menores de 25 años sin hijos a cargo" y los expedientes en los que, tras el cruce de datos con Hacienda Tributaria de Navarra, existen indi-





cios de incumplir el requisito de carencia de medios económicos, que se analizan de manera individual; en la fase II se comprueban y actualizan los ingresos computados, la existencia de perceptores menores de 25 años con menores a cargo y se analizan las diferencias en el número de miembros de la unidad familiar.

Tras estas comprobaciones, se prepara un fichero Excel con los expedientes que no deben ser renovados automáticamente. En la fase III se determina la cuantía de la prestación y la sección de Gestión de Sistemas introduce los pagos en cada expediente. Se tramita la resolución de concesión y el expediente queda identificado en tipo de usuario "PRÓRROGA".

Las unidades familiares perceptoras de renta garantizada durante un año ininterrumpido sin modificación económica de su renta, deben iniciar un proceso personalizado de inclusión social para renovar la RG; para ello, el servicio social de base competente que inicia el procedimiento debe hacer constar en la solicitud de renovación de la RG el inicio de dicho proceso. Si no está marcada la casilla correspondiente en el impreso de renovación, el técnico de valoración envía un aviso al SSB indicándole que debe hacerlo y da por iniciado el procedimiento en la casilla del SIPSS habilitada para ello.

Suspensión

La suspensión cautelar del abono de la prestación por RG se adopta, como medida provisional y hasta un periodo máximo de 60 días naturales, cuando se detectan indicios suficientes de la concurrencia de causa de extinción. La resolución de suspensión de RG sigue el mismo trámite que la resolución de concesión de las ayudas y tiene efectos del mes siguiente al inicio del contrato

También se suspende la prestación a solicitud de la persona interesada, por incorporación temporal a un empleo (estímulos al empleo).

Procedimiento de Inspección

Anualmente se aprueba el Plan de inspección en materia de Servicios Sociales de Navarra. El órgano responsable de la ejecución de dicho plan es la Sección de Inspección del Departamento de Derechos Sociales y una de sus líneas básicas de actuación está orientada al cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de RG, con especial incidencia en la convivencia y residencia.

Desde la SGIPE envían mensualmente a la Sección de Inspección informes de expedientes de RG concedidos con dudas de convivencia y empadronamiento/residencia. También remiten a inspección las denuncias fundadas que llegan a la SGIPE.

La sección de inspección remite a la policía foral dichos expedientes para su investigación, devolviéndole ésta informe y acta de los resultados de sus investigaciones. La jefa de inspección elabora informe provisional sobre los expedientes que procede su archivo, por no constatarse incumplimientos y convoca reunión del Grupo Técnico de trabajo para decidir las medidas a adoptar sobre los expe-





dientes que sí existen indicios de incumplimiento; levanta acta de la reunión con las decisiones y actuaciones adoptadas y realiza informe definitivo tanto de los expedientes archivados como de los inspeccionados con incumplimiento

Los técnicos de valoración realizan las actuaciones que procedan en sus expedientes y los informes definitivos se archivan en la SGIPE.

El manual de procedimiento de inspección de expedientes resueltos con dudas, cuyo flujograma se recoge en el anexo II de este informe, fue realizado en 2016, con la anterior normativa reguladora de la RIS.

IV.2.2 Análisis del cumplimiento del procedimiento

Hemos revisado la documentación relativa al mes de diciembre 2018 que sirve de base para determinar los beneficiarios con derecho a RG en el mes de enero 2019 y que incluye: las solicitudes nuevas de diciembre de 2018 y las renovaciones, modificaciones y suspensiones con efectos en la nómina de enero, para verificar que la tramitación se corresponde con los procedimientos descritos y las comprobaciones realizadas son las que se recogen en dichos procedimientos.

De la revisión efectuada podemos concluir que, en general, los procedimientos son razonables y se adecuan a la normativa aplicable y, en general, se realizan las comprobaciones en ellos descritas, si bien señalamos los siguientes aspectos:

- La tramitación de los expedientes de RG se realiza a través de la aplicación informática SIPSS, utilizada para la gestión de expedientes del Departamento de Derechos Sociales. La aplicación se actualiza constantemente sin que puedan hacerse consultas masivas sobre datos históricos de los expedientes y la explotación de datos relevantes para la gestión y análisis de las ayudas es compleja.
- En el campo "Observaciones" del SIPSS se deja constancia de las comprobaciones realizadas mediante notas introducidas por los técnicos de valoración. Estas notas quedan permanentemente en el expediente pero no es posible un tratamiento cuantitativo de dichas observaciones. Los ficheros soporte de las comprobaciones masivas que se realizan no se archivan, por lo que *a posteriori* no es posible verificar las observaciones descritas, ya que este campo no permite su explotación.
- En ocasiones la documentación aportada desde los SSB no está completa o es insuficiente y exige peticiones de la misma a los técnicos de valoración de la SGIPE.
- La casilla habilitada en SIPSS para hacer constar el inicio de un proceso personalizado de IS al año de percepción de RG sin modificación económica en el expediente, no se ha cumplimentada de forma sistemática. Este dato ha empezado a incluirse recientemente y, por ello, no es posible obtener del SIPSS el número de expedientes que en ese supuesto, han iniciado el proceso personalizado de IS.





- En el caso de unidades familiares perceptoras de RG por un periodo continuo de al menos 24 meses que deseen renovarla, no se han constatado los recursos ofertados de participación en programas de empleo y/o formación incluidos en los programas personalizados de los beneficiarios.
- Desde diciembre de 2018, la SGIPE ha elaborado listados trimestrales de los potenciales beneficiarios de más de 24 meses y los ha enviado a los SSB para que, en su caso, indiquen en la solicitud de renovación para esos beneficiarios, el programa de IS y el recurso propuesto, habiendo modificado los modelos de renovación utilizados para ello.
- No se realizan otras revisiones de oficio, además de los controles mensuales, sobre los beneficiarios de RG para detectar posibles cambios en las condiciones de concesión, por el elevado número de familias perceptoras y por no disponer de alternativas para conocer posibles modificaciones no comunicadas.

Inspección

Por otro lado, hemos revisado las propuestas de resolución de los expedientes que, en el periodo 2016-2018, la SGIPE envía a la sección de inspección porque ha detectado indicios de incumplimiento del requisito de convivencia y empadronamiento. Estos supuestos se remiten a inspección porque la SGIPE no dispone de medios para poder comprobar esos posibles incumplimientos.

Los expedientes inspeccionados han concluido con las siguientes propuestas de resolución:

Año inspección	2016	2017	2018	Total
Extinción y reintegro. Incumplimiento normativa	34	62	112	208
Archivo expediente. No incumplimiento	19	18	23	60
Suspensión	7	1	1	9
Seguimiento especial	-	8	-	8
Extinción de la ayuda	6	-	-	6
Denegación solicitud	-	-	3	3
Consulta extranjería. Ausencia>60 días	-	-	1	1
Total expedientes	66	89	140	295

Se han inspeccionado 295 expedientes; seis de ellos se resuelven con extinción de la ayuda y 208 expedientes, el 71 por ciento del total de expedientes sobre los que se tiene sospecha de incumplimiento de convivencia y empadronamiento, con extinción y reintegro de las ayudas por incumplimiento de la normativa, en supuestos de convivencia y empadronamiento.

La LF 15/2016 establece que las actuaciones dirigidas a obtener o conservar la RG a sabiendas de que no se reúnen los requisitos para ello, darán lugar a infracciones que se sancionarán con la imposibilidad de acceder a la prestación durante determinados periodos de tiempo, sin perjuicio de la obligación del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.





De los 214 expedientes en los que la inspección concluye que hay incumplimiento de la normativa, en tres la Secretaría General Técnica ha incoado expediente sancionador.

Además de estos tres expedientes mencionados, la SGIPE ha iniciado seis expedientes sancionadores, por incumplimientos detectados en el proceso de gestión.

De la revisión efectuada hemos comprobado que:

- La SGIPE no lleva un control que permita conocer en un momento dado la situación en la que se encuentran los expedientes enviados a inspección.
- El manual de procedimiento de inspección de expedientes resueltos con dudas de convivencia y empadronamiento no se ha actualizado con la ley foral reguladora del derecho a la RG.
- No se han incoado expedientes sancionadores en todos los supuestos de incumplimiento de la normativa en supuestos de convivencia y empadronamiento.

IV.3. Análisis de las solicitudes de ayudas por renta garantizada

Hemos analizado las solicitudes de ayudas por RG desde la fecha de entrada en vigor de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos de IS y a la RG, 19 de noviembre de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2018. Por ello, durante este trabajo al indicar (2016-2018) o al mencionar el periodo analizado, estaremos haciendo referencia al espacio de tiempo anteriormente señalado.

El Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo nos ha proporcionado todos los datos necesarios para realizar este análisis mediante ficheros excel que han sido obtenidos del SIPSS, a través de la aplicación EXPLOTA⁷, por personal de dicho servicio.

Número de solicitudes de RG (2016-2018)

El número de solicitudes tramitadas y los beneficiarios⁸ de dichas solicitudes en el periodo analizado, clasificadas por año de registro de la solicitud, es el siguiente:

Año de la solicitud	2016*	2017	2018	Total
Solicitudes	1.905	16.148	16.307	34.360
Beneficiarios	4.353	36.751	37.601	78.705
Media de beneficiaros	2,29	2,28	2,31	2,29

^{*}Solicitudes desde 19 de noviembre de 2016

⁸ Beneficiarios: Todos los miembros de la unidad familiar computables.



- 21 -

⁷ Aplicación informática para la explotación de datos de SIPSS.



Durante el periodo 2016-2018 se han tramitado 34.360 solicitudes de RG, que corresponden a 20.023 solicitantes. Esta diferencia entre solicitudes y solicitantes se produce porque un solicitante puede tener varias solicitudes durante el periodo analizado, por renovaciones, suspensiones, anulaciones, etc.

Durante el citado periodo, y para esas solicitudes, 9.303 personas renovaron su RG transcurrido un año desde su concesión; de éstas, 638 personas tuvieron, a su vez, renovación de RG a los dos años, por lo que durante este periodo hubo 9.941 renovaciones.

Dado que nuestro análisis se refiere a las solicitudes presentadas a partir del día 19 de noviembre de 2016, debemos señalar que, desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2018, puede haber renovaciones por el transcurso de uno o dos años de expedientes anteriores a noviembre de 2016 que no identifiquemos como renovaciones.

En el anexo III que acompaña a este informe se recoge información sobre las solicitudes de ayudas de RG por edad y nacionalidad del titular de la solicitud y por sexo de titulares y beneficiarios.

Solicitudes de RG por Servicio Social de Base

El procedimiento de RG se inicia a instancia del interesado mediante la presentación de la solicitud en el SSB que le corresponda por domicilio. El número de solicitudes según el área de servicios sociales de la que proceden es el siguiente:

Área Servicios Sociales	2016*	2017	2018	Total	% solicitudes por SSB
Área de Pamplona y comarca	1.153	10.250	10.213	21.616	63
Área de Tudela	293	2.486	2.605	5.384	16
Área de Estella	191	1.509	1.623	3.323	10
Área de Tafalla	163	1.012	1.001	2.176	6
Área Noroeste	68	577	604	1.249	3
Área Noreste	37	314	261	612	2
Total	1.905	16.148	16.307	34.360	100

^{*}A partir del 19 de noviembre

El 89 por ciento de las solicitudes proceden de las áreas de Pamplona y su comarca, Tudela y Estella. El Anexo IV de este informe incluye un mayor desglose de las solicitudes del periodo analizado por áreas de servicios sociales y SSB.

Solicitudes de RG por resultado de valoración

Las solicitudes de RG deben resolverse en el plazo máximo de tres meses desde su entrada en cualquier registro del Gobierno de Navarra. Si la resolución no se dicta y notifica en dicho plazo, la solicitud se entiende estimada por silencio administrativo. Este plazo queda suspendido cuando se requiere a la persona intere-

⁹ Persona que solicita la ayuda y a cuyo nombre figura el expediente.



- 22 -



sada la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento o por el transcurso del plazo concedido.

La situación de las solicitudes presentadas es:

Año solicitud	Total solicitudes 2016-2018	% tipo resolución
Concedidas	28.792	84
No concedidas	4.426	13
Denegadas	2.883	
Archivadas	1.474	
Anuladas	68	
Pendientes de resolver*	1.142	3
Sin valorar	1.034	
Pendiente documentación	108	
Total solicitudes	34.360	100

^{*}Solicitudes de 2018

A la fecha de obtención de los datos en el SIPSS, 22 de enero de 2019, y para el periodo analizado, 28.792 solicitudes habían sido concedidas, un 84 por ciento, y un 13 por ciento solicitudes habían sido no concedidas, de las cuales el 65 por ciento han sido denegadas.

Solicitudes de RG con tramitación abreviada

El artículo 27 del Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, desarrolla la tramitación de las solicitudes de RG en supuestos de violencia de género. Para ello, la víctima debe acreditar dicha condición y el expediente se tramita de forma preferente debiendo reconocerse el derecho a la prestación en el plazo máximo de un mes desde la entrada de la solicitud.

Las solicitudes con tramitación abreviada ascienden a 35, dos en el año 2017 y 33 en el año 2018. Estas solicitudes clasificadas por nacionalidad administrativa de la solicitante son las siguientes:

Nacionalidad	2016	2017	2018	Total solicitudes
España	-	1	22*	23
América	-	1	4	5
África	-	-	5	5
Europa	-	-	2	2
Total solicitudes violencia de género	-	2	33	35

^{*}Cinco de nacionalidad de origen americana, una europea y una africana.

Es decir, el 64 por ciento de las solicitantes tiene nacionalidad española.





Supuestos específicos de acceso a RG

Se han tramitado 719 solicitudes de acceso excepcional, 640 de personas en situación de necesidad y 79 por residencia en recurso temporal en el periodo 2016-2018. En 2018 respecto a 2017 han aumentado un 25 por ciento estas solicitudes de acceso excepcional.

Exclusión social grave	2016*	2017	2018	Total solicitudes
Personas en situación de necesidad	29	277	334	640
Persona residiendo en recurso temporal	12	24	43	79
	41	301	377	719

^{*}A partir del 19 de noviembre

IV.4. Evolución de las ayudas por renta garantizada

Para analizar la evolución de las ayudas por RG hemos comparado las "nóminas" de los meses de noviembre de 2016, 2017 y 2018.

Se denomina "nómina" de un mes, todas las personas que tienen reconocido el derecho a RG en dicho periodo; en función del momento en el que se obtenga el dato del SIPSS, el número de perceptores varía ya que el programa no guarda histórico a una fecha y los datos se actualizan constantemente con las modificaciones que se van produciendo en los expedientes. Los datos analizados se han obtenido del SIPSS el 6 de febrero de 2019.

Titulares y beneficiarios de RG (2016-2018)

Los titulares y beneficiarios de RG en nuestro periodo de análisis son:

	Noviembre 2016*	Noviembre 2017	% variación 2017/2016	Noviembre 2018	% variación 2018/2017	% variación 2018/2016
Titulares	11.277	12.417	10	12.413	0	10
Beneficiarios	25.155	28.730	14	29.030	1	15

^{*}De los 11.277 expedientes de la nómina de noviembre 2016, 10.055 corresponden a ayudas RIS; el resto, 1.222 expedientes, corresponden a ayudas por RG.

Titulares y beneficiarios de RG por tramos de edad

En el cuadro siguiente clasificamos los titulares y beneficiarios de RG de acuerdo a los tramos de edad, a la fecha de la solicitud, definidos en la normativa:

Tramos de edad —	Noviemb	Noviembre 2016		ore 2017	Noviemb	Noviembre 2018	
Trainios de edad —	Titulares	Beneficiarios	Titulares	Beneficiarios	Titulares	Beneficiarios	
Menos 18 años	2	9.766	2	11.502	1	11.718	
>=18 y <=25 años	732	1.930	602	1.928	636	2.026	
> 25 y <= 65 años	10.532	13.285	11.707	14.987	11.616	14.891	
Más de 65 años	11	174	106	313	160	395	
Total	11.277	25.155	12.417	28.730	12.413	29.030	





El mayor número de titulares y beneficiarios tienen edades entre 25 y 65 años. A nivel de titulares, las personas en dicho tramo de edad representan, aproximadamente, el 94 por ciento del total de titulares de RG en ese mes; en el caso de los beneficiarios este porcentaje supera el 50 por ciento en ese tramo de edad. El número de beneficiarios menores de edad asciende al 40 por ciento en los tres meses analizados.

El número de titulares de más de 65 años aumenta en las nóminas de noviembre 2017 y noviembre 2018 respecto a la nómina de 2016, debido, principalmente a que la ley reguladora de la RG, en vigor desde el 19 de noviembre de 2016, incluye a este colectivo y la ley reguladora de la RIS únicamente lo incluía cuando tenía cargas familiares.

Titulares y beneficiarios de RG por sexo

		Noviembre 2016 Noviem			Noviemb	ore 2017		Noviembre 2018				
Sexo	Titulare	itulares Beneficiarios		Titulares		Beneficiarios		Titulares		Beneficiarios		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Mujer	6.243	55	13.062	52	7.037	57	15.104	53	7.345	59	15.682	54
Hombre	5.034	45	12.093	48	5.380	43	13.626	47	5.068	41	13.348	46
Total	11.277	100	25.155	100	12.417	100	28.730	100	12.413	100	29.030	100

El porcentaje de titulares mujeres supera al de titulares hombres, con tendencia ascendente en las nóminas analizadas. Así, en la nómina del mes de noviembre de 2018, las mujeres titulares de RG representan el 59 por ciento, cuatro puntos porcentuales más que en la nómina de noviembre 2016.

Titulares y beneficiarios de RG por nacionalidad

Nacionalidad	nov-16				nov-17				nov-18			
Nacionalidad	Titulares		Beneficiarios		Titulares		Beneficiarios		Titulares		Beneficiarios	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Española	5.699	51	11.750	47	5.920	48	12.493	43	5.689	46	12.089	42
Americana	2.142	19	4.527	18	2.446	20	5.262	18	2.502	20	5.382	19
Africana	2.131	19	6.199	25	2.610	21	7.886	27	2.730	22	8.410	29
Europea	1.254	11	2.557	10	1.356	11	2.873	10	1.390	11	2.892	10
Resto	51	0	122	0	85	1	216	1	102	1	257	1
Total	11.277	100	25.155	100	12.417	100	28.730	100	12.413	100	29.030	100

Como se observa en el cuadro anterior, el porcentaje del 50 por ciento de titulares de nacionalidad española en la nómina del mes de noviembre de 2016, desciende dos puntos porcentuales en las nóminas de noviembre de los años siguientes, incrementándose, principalmente los titulares de RG de origen americano y africano. También el porcentaje de beneficiarios de nacionalidad española disminuye en 2017 y 2018 respecto a 2016, aumentando el número de beneficiarios de origen africano, principalmente.





Titulares y beneficiarios de RG por áreas de servicios sociales

Los porcentajes tanto de titulares como de beneficiarios, por áreas de servicios sociales, se mantienen de manera uniforme en las tres nóminas analizadas. Las áreas de Pamplona y comarca y Tudela suponen el 80 por ciento de los titulares de RG.

,	Noviembre 2016				N	Noviembre 2017				Noviembre 2018			
Area servicios Sociales	Titulare	es	Beneficia	rios	Titular	es	Beneficia	arios	Titulare	s	Beneficia	rios	
Conance	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	
Pamplona y comarca	7.359	65	14.759	59	8.039	65	16.592	58	7.850	63	16.292	56	
Tudela	1.726	15	4.838	19	1.884	15	5.554	19	1.988	16	5.845	20	
Estella	1.028	9	2.711	11	1.163	9	3.183	11	1.229	10	3.460	12	
Tafalla	617	5	1.682	7	738	6	2.027	7	747	6	2.056	7	
Área Noroeste	371	3	783	3	414	3	951	3	422	3	967	3	
Área Noreste	176	2	382	2	179	1	423	1	177	1	410	1	
Total beneficiarios	11.277	100	25.155	100	12.417	100	28.730	100	12.413	100	29.030	100	

IV.5. Indicadores de la prestación por renta garantizada

En este apartado analizamos determinados indicadores sobre la prestación de las ayudas por RG:

Número de personas que acceden a un trabajo percibiendo la prestación

Las personas de las unidades familiares perceptoras de RG, en edad laboral y en disposición de acceder a un empleo, que han accedido a uno o más contratos de trabajo durante el tiempo de percepción de la prestación son:

Año	Perceptores de RG*	Personas contratadas	% personas contratadas	Contratos suscritos	Índice de rotación
2016	20.863	5.621	27	17.008	3,03
2017	22.379	6.894	31	20.476	2,97
2018	23.437	6.997	30	21.064	3,01

^{*}Personas en edad laboral y en disposición de acceder al empleo de las unidades familiares perceptoras de ayuda. Datos facilitados por el Servicio de Garantía de ingresos y Cooperación al Desarrollo y la Sección de Planificación y Evaluación.

En el año 2016, las personas contratadas fueron 5.621, un 27 por ciento del total de beneficiarios en edad laboral y disposición de acceder a un empleo; en 2017, estas personas contratadas aumentaron hasta 6.894 y un 31 por ciento; en 2018, aunque aumentan las personas contratadas, 103 personas más, disminuye el porcentaje de las personas contratadas a un 30 por ciento de las personas susceptibles de ser contratadas.

En 2018 se suscribieron 21.064 contratos, un tres por ciento más que en 2017. El índice de rotación de tres contratos por persona contratada en edad laboral y disposición de acceder a un empleo, se mantiene constante los tres años del análisis.





Número de unidades familiares perceptoras de RG que acceden a un trabajo y suspenden la prestación y que han tenido estímulos al empleo

Concepto	2017	2018
I. Suspensión de la prestación por encontrar empleo (Baja)		
a. Extinción de la prestación por incorporación al mercado laboral	669	540
b. Extinción de la prestación por incorporación a empleo social protegido u otro empleo sub vencionado	216	168
c. Suspensión temporal de la prestación por incorporación laboral	304	528
A. Total baja de la prestación (a+b+c)	1.189	1.236
B. Nueva solicitud	389	233
C. No hay nueva solicitud (A-B)	800	1.003
II. Mecanismos de incentivación del empleo compatibilizando con la prestación		
d. Aplicación de estímulos al empleo*	900	1.905
e. Modificación de la prestación por incorporación a empleo social protegido u otro empleo subvencionado	271	336
D. Total modificación de la prestación (d+e)	1.171	2.241
III. Total baja más modificación por incorporación laboral (A+D)	2.360	3.477

^{*} Dado que la aplicación de los estímulos al empleo no siempre conllevan modificación, las personas con trabajo a las que se les ha aplicado estímulos al empleo son 3.221.

El número de unidades familiares que en el año 2017 han suspendido la prestación por incorporación al mercado laboral ha sido de 1.189; de ellas, 885 han extinguido la prestación y 304 la han suspendido temporalmente.

En 2018 se han incrementado en 47 las unidades familiares en las que algún miembro computable ha accedido a un trabajo, 1.236 unidades familiares; sin embargo, las unidades familiares que extinguen la prestación son un 20 por ciento menos que el año anterior, 708 unidades, aumentando las que suspenden temporalmente la prestación, 528 unidades, un 74 por ciento más que el año anterior.

Según datos facilitados por el Servicio de Garantía de ingresos y Cooperación al desarrollo¹⁰, el número de unidades familiares que han cobrado RG algún mes del año 2017 asciende a 15.918 y a 16.078 en el año 2018. En consecuencia, el porcentaje de unidades familiares que se incorporan al mercado laboral y se dan de baja en la prestación, por extinción o suspensión temporal, en los años 2017 y 2018 es de, aproximadamente, el 7,5 por ciento.

La normativa reguladora permite compatibilizar la RG con un empleo; se aplica la fórmula de estímulos al empleo a todos los ingresos de la unidad familiar por actividades laborales y se modifica o no el importe de RG de esa unidad familiar, en función de dichos ingresos.

¹⁰ Fecha obtención de datos año 2017: septiembre 2018. Fecha obtención de datos año 2018: enero 2019



- 27 -



En 2017, han tenido alguna modificación en la prestación por la aplicación de estímulos al empleo 1.171 unidades familiares, un 7,4 por ciento del total de unidades familiares; en 2018, dicho porcentaje asciende a un 14 por ciento con 2.241 unidades familiares.

Unidades familiares que tras un periodo de suspensión o extinción de la RG por acceso al mercado laboral retoman la prestación.

Como observamos en el cuadro anterior, las unidades familiares que tras un periodo de suspensión o extinción de la RG por acceso al mercado laboral retoman la prestación, ascienden a 389 en 2017, un 33 por ciento de las bajas producidas, y a 233 en 2018, un 19 por ciento. Es decir, es menor cuantitativa y porcentualmente el número de personas que retoman la prestación por RG en el ejercicio 2018 respecto a 2017.

Importe medio de concesión por miembros de la unidad familiar (2014-2018)

En el siguiente cuadro se recoge la evolución del importe medio de concesión de RG, según la resolución que aprueba el expediente y sin tener en cuenta las variaciones que estos pueden tener durante la vigencia de la prestación, por número de miembros de la unidad familiar de un miembro para el periodo 2014-2018:

		MEDIA DE CONCESIÓN POR U.F.*										
Nº MIEMBROS U.F.	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	% Var. 2018/2014	% Var. 2018/2017					
1 miembro	439	547	545	519	532	21	3					
2 miembros	521	582	614	655	661	27	2					
3 miembros	570	629	684	751	792	39	5					
4 miembros	593	687	747	861	877	48	2					
5 miembros	630	743	817	926	957	52	3					
6 o más miembros	724	791	900	1.035	1.014	40	-2					
Media Total	514	601	629	664	686	34	3					

^{*}Datos facilitados por el Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo

El importe medio de concesión aumenta para todos los tramos de miembros de la unidad familiar y para cada año del periodo 2014-2018, hasta alcanzar los 686 euros de media total en el año 2018, un 34 por ciento más que en el año 2014.





Gasto medio por unidad familiar 2016-2018

Año	Concepto	Obligaciones reconocidas	Número de unidades familiares*	Gasto medio por unidad familiar	% variación gasto medio unidad familiar
2014	Renta de inclusión social	50.994.902	11.717	4.352	-
2015	Renta de inclusión social	65.801.708	12.876	5.110	17
2016	Renta de inclusión social	83.033.506	14.540	5.711	12
2017	Renta garantizada	98.151.920	15.918	6.166	8
2018	Renta garantizada	103.677.924	16.078	6.448	5

^{*} Número de unidades familiares que han percibido RG en algún mes de ese año.

El gasto medio por unidad familiar se ha incrementado durante el periodo 2014-2018 desde los 4.352 euros anuales hasta los 6.448, lo que supone un incremento del 48 por ciento.

Tasa de cobertura por áreas de servicios sociales

La "Tasa de cobertura por cada mil habitantes", definida como el número de perceptores en relación al padrón municipal, es el indicador utilizado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el Informe de Rentas mínimas de Inserción 2017¹¹:

Área SS	Población 1/1/2016	Benefic. Nov. 2016	Tasa cobertura	Población 1/1/2017	Benefic. Nov. 2017	Tasa cobertura	Población 1/1/2018	Benefic. Nov. 2018	Tasa cobertura
Área Pamplona y comarca	360.639	14.759	41	363.493	16.592	46	367.264	16.292	44
Área de Tudela	95.159	4.838	51	95.409	5.554	58	95.945	5.845	61
Área de Estella	70.196	2.711	49	69.939	3.183	46	70.044	3.460	49
Área Noroeste	50.297	783	16	50.259	951	19	50.282	967	19
Área de Tafalla	44.655	1.682	38	44.562	2.027	45	44.601	2.056	46
Área Noreste	19.701	382	19	19.572	423	22	19.418	410	21
Total beneficiaros	640.647	25.155	39	643.234	28.730	45	647.554	29.030	45

Este indicador, beneficiarios sobre total de la población, varía significativamente en las distintas áreas de servicios sociales; las mayores tasas de cobertura se dan en las áreas de Tudela, entre 50 y 60, las áreas de Pamplona, Estella y Tafalla, entre 40 y 50 y las áreas Noroeste y Noreste entre 10 y 20.

Debemos señalar que en Navarra todas las personas que no pueden hacer frente a sus necesidades básicas, condicionada al cumplimiento de unos requisitos de edad, residencia y capacidad económica definidos en la normativa reguladora tienen derecho a la prestación por RG.

En el anexo V de este informe se detallan los beneficiarios por áreas de servicios sociales y SSB en relación con su población.

¹¹ https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/Informe 2017.pdf





IV.6. Conclusión final y recomendaciones

En definitiva, la renta garantizada es una prestación básica, económica y periódica destinada a todas las personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas y que cumplen los requisitos establecidos en la normativa.

En 2018 el gasto en RG ha sido de 104 millones de euros; aproximadamente, los beneficiarios mensuales son 29.000 y corresponden a 12.000 unidades familiares. El gasto medio anual por unidad familiar en 2018 asciende a 6.448 euros.

La ley foral reguladora de este derecho ha supuesto una mejora en la gestión de la RG, un detallado diseño de los procedimientos que en ella intervienen y una mayor carga de trabajo y actividad administrativa para el control de este derecho.

En 2018, el porcentaje de personas que, en edad laboral y en disposición de acceder a un empleo y percibiendo prestación por RG, han accedido a un empleo, ha sido del 30 por ciento. Como consecuencia de ello, 1.238 unidades familiares han suspendido la prestación por incorporación laboral, un 7,5 por ciento de las unidades familiares beneficiarias de RG.

Los estímulos al empleo, como mecanismo de incentivación del empleo, han supuesto en el año 2018, la modificación de la prestación de RG en 2.241 unidades familiares, con un aumento del 91 por ciento respecto a 2017. Sin embargo, estas unidades familiares suponen únicamente el 14 por ciento de las unidades beneficiarias de la prestación durante ese año.

La sección de inspección ha revisado todos los expedientes que le ha enviado la SGIPE. Se han inspeccionado 295 expedientes sobre los que tenía indicios de incumplimiento sobre convivencia y empadronamiento y en el 71 por ciento de los mismos se confirma el incumplimiento por parte del beneficiario de sus obligaciones, siendo causa para la instrucción de expedientes sancionadores.

De la revisión realizada esta Cámara opina que, en general, la gestión del derecho a la RG se adecúa a la normativa aplicable, los procedimientos son razonables y se realizan, en general, los controles de requisitos, capacidad económica y disposición para el empleo en ellos descritos, si bien exponemos a continuación las recomendaciones que consideramos oportunas para mejorar la gestión de las ayudas de RG:

- Tramitar todos los expedientes de renta garantizada a través de la aplicación informática TRAMITA.
- Cumplimentar adecuadamente toda la documentación exigida en la normativa para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la obtención de la RG, por parte de los SSB con el fin de agilizar la tramitación de este derecho.





- Dejar constancia de los controles realizados en los expedientes de solicitud, renovación y modificación de las ayudas por RG para comprobaciones posteriores de los cambios efectuados.
- Constatar el inicio de un proceso personalizado de inclusión social para todas las renovaciones de RG tras un año ininterrumpido de cobro de la prestación y los recursos ofertados de participación en programas de empleo y/o formación a los beneficiarios de RG tras un periodo continuo de al menos 24 meses de percepción.
- Realizar revisiones de oficio sobre las unidades familiares o beneficiarios de RG, al azar o por muestreo, con el objetivo de detectar posibles incumplimientos de los requisitos exigidos en la normativa.
- Realizar un seguimiento de los expedientes que se envían a la sección de inspección con los informes que se reciben de dicha sección.
- Adaptar el manual de inspección a la ley foral reguladora vigente del derecho a la RG.
- Incoar los procedimientos sancionadores en todos los casos de incumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios de RG.
- Definir en los presupuestos generales de Navarra los indicadores necesarios para valorar la eficacia y eficiencia de la gestión de la RG.
- Estudiar la conveniencia de adaptar el programa informático utilizado para la gestión del derecho a una RG para que la explotación y análisis de los datos permita conocer y evaluar de manera ágil y operativa el cumplimiento de los objetivos propuestos.
- Potenciar políticas de empleo y de acceso al mercado laboral para conseguir dotar a las personas de autonomía económica.
- Aprobar futuros planes estratégicos de inclusión social en los plazos establecidos en la normativa aplicable.

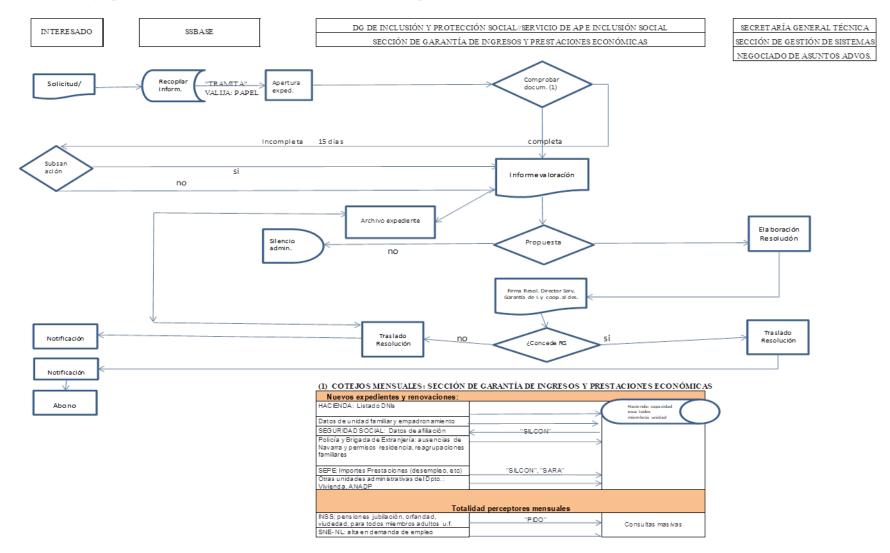
Informe que se emite a propuesta de la auditora Mª Carmen Azcona Díez de Ulzurrun, responsable de la realización de este trabajo, una vez cumplimentados los trámites previstos por la normativa vigente.

Pamplona, 4 de abril de 2019 La presidenta, Asunción Olaechea Estanga





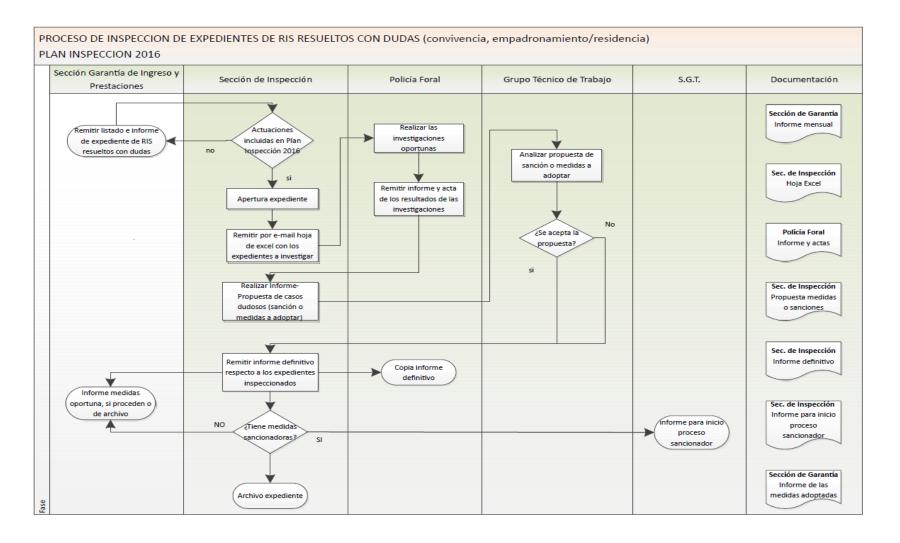
Anexo I. Flujograma procedimiento concesión renta garantizada







Anexo II. Flujograma procedimiento inspección







Anexo III. Solicitudes de renta garantizada 2016-2018

Solicitudes por tramos de edad del titular

Tramos de edad	2016	2017	2018	Total	% solicitudes por tramos de edad
Menos 18 años	1	5	4	10	-
>=18 y <=25 años	116	895	886	1.897	6
> 25 y <= 65 años	1.750	15.069	15.164	31.983	93
Más de 65 años	38	179	253	470	1
Total solicitudes	1.905	16.148	16.307	34.360	100

Solicitudes por nacionalidad del titular

N° solicitudes	Nacionalidad de origen	% de nación. origen	Nacionalidad administrativa	% de nación administ.
España	16.022	47	22.685	66
África	7.329	21	5.436	16
América	7.071	21	2.577	10
Europa	3.683	11	3.447	8
Asia	198	1	168	0
Apátridas	47	0	42	0
Oceanía	2	0	4	0
No indica	8	0	1	0
Total solicitudes	34.360	100	34.360	100

Solicitudes por sexo de titulares y beneficiarios

N° solicitudes	Total	Mujer	% mujer	Hombre	% hombre
Titulares	34.360	19.588	57	14.772	43
Beneficiarios	78.705	41.552	53	37.153	47





Anexo IV. Solicitudes de renta garantizada 2016-2018 Servicio Social de Base

Área SS	SSB	2016	2017	2018	Total	% solicitudes SSB
Área de Estella	1. Allo	14	71	95	180	5
	20. Estella	51	461	461	973	29
	27. Lodosa	30	307	351	688	21
	28. Los Arcos	3	33	34	70	2
	3. Ancín-Améscoa	6	66	64	136	4
	34. Puente La Reina	15	136	138	289	9
	36. San Adrián	48	303	325	676	20
	42. Viana	14	85	99	198	6
	43. Villatuerta	10	47	56	113	3
Total Área de Estella		191	1.509	1.623	3.323	10
Área Pamplona y Comarca	11. Burlada	79	635	635	1.349	6
	15. Cizur	31	280	250	561	3
	18. Egües	48	380	348	776	4
	22. Huarte	13	168	155	336	2
	29. Noain	45	325	326	696	3
	31. Orkoien	17	186	168	371	2
	32. Pamplona	727	6.521	6.615	13.863	64
	40. Ultzama	2	34	32	68	0
	44. Villava	36	260	241	537	2
	5. Aranguren	12	60	64	136	1
	8. Barañain	61	503	482	1.046	5
	9. Berriozar	82	898	897	1.877	9
Total Área Pamplona y Co	marca	1.153	10.250	10.213	21.616	63
Área de Tafalla	12. Carcastillo	21	139	141	301	14
	30. Olite	42	259	232	533	24
	33. Peralta	52	333	337	722	33
	38. Tafalla	37	191	189	417	19
	6. Artajona	11	90	102	203	9
Total Área de Tafalla	,	163	1.012	1.001	2.176	6
Área de Tudela	10. Buñuel	35	264	286	585	11
	13. Cascante	37	322	322	681	13
	14. Cintruénigo	42	356	351	749	14
	16. Corella	48	403	415	866	16
	39. Tudela	96	812	879	1.787	33
	41. Valtierra	35	329	352	716	13
Total Área de Tudela		293	2.486	2.605	5.384	16
Área Noreste	24. Isaba	-	-	2	2	0
	35. Salazar	1	3	4	8	1
	37. Sangüesa	27	225	172	424	69
	4. Aoiz	9	83	76	168	27
	7. Auritz/Burguete		3	7	10	2
Total Área Noreste	Ţ,	37	314	261	612	2
Área Noroeste	17. Doneztebe	7	61	72	140	11
	19. Elizondo	13	78	79	170	14
	20. Alsasua	18	184	179	381	31
	21. Etxarri Aranatz	6	51	58	115	9
	23. Irurtzun	13	126	129	268	21
	25. Leitza	5	42	50	97	8
	26. Lesaka	6	35	37	78	6
Total áras Narasata						
Total área Noroeste		68	577	604	1.249	4





Anexo V. Beneficiarios de renta garantizada servicio social de base.

Á 00	ZBSS	Noviembre 2016		Noviembre 2017		Noviembre 2018	
Área SS		Población	Beneficiarios	Población	Beneficiarios	Población	Beneficiarios
Área de Estella	1. Allo	5.154	151	5.088	186	5.144	257
	20. Estella	16.418	764	16.537	864	16.480	863
	27. Lodosa	11.080	560	10.961	640	10.959	753
	28. Los Arcos	2.275	54	2.217	48	2.176	63
	3. Ancín-Amescoa	4.272	87	4.191	86	4.131	90
	34. Puente La Reina	7.624	168	7.582	208	7.692	226
	36. San Adrián	13.864	668	13.813	865	13.848	909
	42. Viana	4.551	179	4.594	191	4.655	189
	43. Villatuerta	4.958	80	4.956	95	4.959	110
Total Área de Estella		70.196	2.711	69.939	3.183	70.004	3.460
Área de Pamplona y	11. Burlada	18.338	828	18.591	919	18.934	914
Comarca	15. Cizur	18.373	291	18.470	321	18.741	317
	18. Egües	20.046	683	20.417	783	20.774	708
	22. Huarte	9.485	275	9.546	266	9.614	268
	29. Noain	15.730	507	15.885	590	16.036	575
	31. Orkoien	7.601	229	7.736	314	7.858	260
	32. Pamplona	195.650	9.436	197.138	10.607	199.066	10.487
	40. Ultzama	3.746	51	3.730	48	3.707	45
	44. Villava	12.466	361	12.377	404	12.317	400
	5. Aranguren	9.801	81	10.239	99	10.512	90
	8. Barañain	20.325	623	20.124	703	20.039	673
	9. Berriozar	29.078	1.394	29.240	1.538	29.666	1.555
Total Área de Pamplor		360.639	14.759	363.493	16.592	367.264	16.292
Área de Tafalla	12. Carcastillo	4.713	299	4.680	407	4.727	412
	30. Olite	8.605	367	8.654	420	8.622	397
	33. Peralta	13.454	542	13.451	635	13.476	646
	38. Tafalla	12.671	309	12.599	347	12.587	334
	6. Artajona	5.212	165	5.178	218	5.189	267
Total Área de Tafalla		44.655	1.682	44.562	2.027	44.601	2.056
Área de Tudela	10. Buñuel	13.992	504	13.868	553	13.947	610
	13. Cascante	11.592	588	11.657	787	11.830	815
	14. Cintruénigo	9.775	855	9.873	911	9.840	915
	16. Corella	11.735	824	11.756	907	11.816	1.005
	39. Tudela	35.170	1.490	35.298	1.707	35.593	1.766
	41. Valtierra	12.895	577	12.957	689	12.919	734
Total Área de Tudela		95.159	4.838	95.409	5.554	95.945	5.845
Área Noreste	24. Isaba	1.365	3	1.342		1.342	1
	35. Salazar	1.596	7	1.565	3	1.534	6
	37. Sangüesa	10.017	278	9.987	280	9.884	275
	4. Aoiz	4.376	89	4.364	140	4.388	119
	7. Auritz/Burguete	2.347	5	2.314		2.270	9
Total Área Noreste		19.701	382	19.572	423	19.418	410
Área Noroeste	17. Doneztebe	5.455	102	5.436	100	5.423	123
	19. Elizondo	8.355	92	8.362	119	8.329	111
	2. Alsasua	9.347	240	9.294	296	9.265	297
	21. Etxarri Aranatz	6.653	64	6.658	87	6.685	85
	23. Irurtzun	7.999	154	8.008	221	8.049	240
	25. Leitza	3.949	82	3.944	71	3.994	63
	26. Lesaka	8.539	49	8.557	57	8.537	48
Total Área Noroeste		50.297	783	50.259	951	50.282	967
TOTAL BENEFICIARI	OS	640.647	25.155	643.234	28.730	647.554	29.030





Alegaciones formuladas al informe provisional



ASUNTO: 12 FISCALIZACIONES

PRESIDENCIA

Nafarroako Gobernua 1887



ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL

RENTA GARANTIZADA E INCLUSIÓN SOCIAL (2016 – 2018)

Agradecimiento

Agradecemos al equipo de auditoría de la Cámara de Comptos la interlocución y trabajo efectuado para la realización de este informe, que facilitará la mejora en los procesos de gestión de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada

Consideración previa.

Primera.- La aprobación y entrada en vigor de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada ha supuesto, como menciona el propio informe provisional, la adopción en el sistema de protección social de Navarra del modelo de doble derecho, que es acorde con la recomendación final del Informe sobre Gestión de la Renta Básica (2009 – 2010) de esa misma Cámara de Comptos.

La propia Ley Foral contemplaba ya una implementación progresiva de las diferentes medidas en ella contenida, como eran, entre otros aspectos, el diseño y aprobación de Planes Estratégicos de Inclusión Social, el desarrollo reglamentario de la norma, un calendario de implantación de los diferentes estímulos e incentivos al empleo, la consideración del ejercicio conjunto de los dos derechos por parte de determinadas unidades familiares.

Pues bien, esta visión procesual de la implantación, se considera debe ser recogida de forma expresa dado que afecta a la gestión de los derechos analizados, al menos debe hacerse una referencia contextual que permita comprender mejor el proceso de implementación y de mejora progresiva tanto de la gestión como del efecto sobre las personas que acceden a estos derechos.

Es particularmente relevante enmarcar este carácter progresivo en relación a lo que ha significado la aprobación del Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, por el que se desarrollan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, en la mejora de procesos y clarificación de criterios de aplicación de la norma. Hasta ese momento se contó con un documento de criterios internos tanto para uso del Departamento como por los Servicios Sociales de Base y con la experiencia adquirida se fue reflejando en el desarrollo normativo.

Todo este despliegue ha tenido reflejo en acciones como la elaboración y puesta en marcha del protocolo de actuación conjunta para el control y seguimiento de las obligaciones relativas al empleo de las personas perceptoras de renta garantizada entre la Dirección General de Inclusión y Protección Social y el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare; las sesiones de trabajo con profesionales de los Servicios Sociales de base, con Orientadores y



Directores de las Agencias de Empleo; el proyecto de innovación social ERSISI de integración de servicios sociales y de empleo; las sesiones formativas sobre los derechos y obligaciones de la ley para perceptores de renta garantizada llevadas a cabo por la Dirección General de Inclusión y Protección Social y el Servicio Navarro de Empleo — Nafar Lansare; la reciente aprobación mediante Orden Foral del Sistema de Información del Derecho a la Inclusión Social (SIDIS): las mejoras en la interoperabilidad de sistemas de información con accesos o en su caso cruces de datos masivos, entre Hacienda Foral de Navarra, Seguridad Social, Servicio Navarro de Empleo — Nafar Lansare o SEPE.

En resumen, se considera oportuno introducir estos elementos contextuales para la compresión de la gestión analizada.

Renta Garantizada e Inclusión Social.

Segunda.- En la pág. 6 se hace mención a los "estímulos al empleo", recogiendo estrictamente los estímulos al empleo en el mercado laboral ordinario.

Este es sólo uno de los mecanismos que la Ley Foral 15/2016 introduce para hacer frente a la incorporación socio-laboral, se considera oportuno que se reflejen todos estos mecanismos, es decir:

- Estímulos al empleo ordinario, en sus tres fases de implementación: ingresos sobrevenidos, en el acceso al derecho, y mecanismos fiscales para empleos con salarios bajos.
- Incentivos para el empleo subvencionado y/o protegido
- Suspensión temporal por incorporación laboral

Objetivos, alcance y limitaciones.

Tercera.-En la pág. 12 aparecen cuatro puntos, de los cuales dos son de contenido similar, se entiende que debe ser una errata, dando nuestra conformidad al párrafo que dice "Obtener [...]".

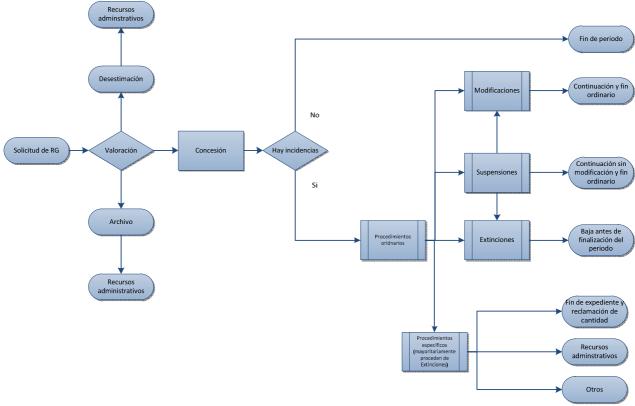
Conclusiones y recomendaciones.

Apartado IV.2.2 Análisis del cumplimiento del procedimiento

Cuarta.- En la pág. 19, en el tercer párrafo, se señala que "No se realizan otras revisiones de oficio, además de [...]"; si bien en sentido estricto esto es así, también lo es que la gestión de los expedientes de Renta Garantizada lleva aparejadas dos fases diferentes según se contempla en el gráfico siguiente, la primera corresponde con lo recogido en el informe provisional (pág. 14) sobre Valoración, y la segunda con la gestión de las diferentes incidencias que sobre los expedientes activos (concesiones) van ocurriendo a lo largo del periodo de concesión, la gestión de estas incidencias refleja el control y seguimiento de los expedientes que lleva a cabo la SGIPE. En esta fase podemos distinguir dos grupos de procedimientos interrelacionados entre sí, unos relacionados con las tres figuras administrativas ordinarias reguladas tanto en la norma vigente como las precedentes y que



son la modificación de la prestación, la suspensión de la misma y la extinción; y las otras relacionadas con actuaciones más específicas relacionadas con reclamaciones y recursos.



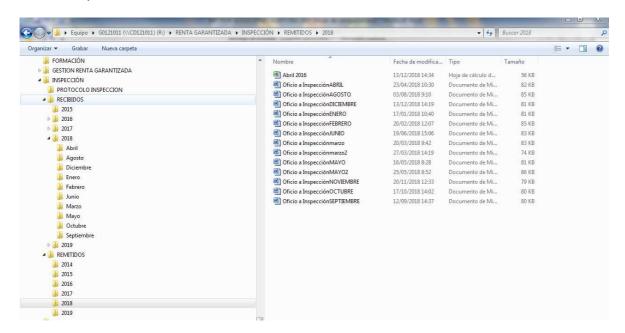
En la tabla siguiente se refleja toda esta actividad. Se ha utilizado como indicador el n^{ϱ} de expedientes contenidos en cada tipo de Resolución administrativa dictada en cada año natural. Dado que los expedientes que eran de renta de inclusión social también son objeto de estos controles, y que no se diferencian a la hora de la gestión, los datos son por tanto relativos a ambas prestaciones conjuntamente. Es especialmente significativo el incremento de expedientes que son objeto de actuación en la fase II (control y seguimiento).

Procesos de gestión	2016	2017	2018
Control y Seguimiento, procedimientos ordinarios	6.113	9.150	11.534
Extinción	1.775	1.549	1.970
Modificación	3.326	5.433	6.832
Suspensión	1.012	2.168	2.732
Control y Seguimiento, procedimientos específicos	382	498	707
Otros	35	10	17
Reclamación	283	383	551
Recurso desestimación	53	89	111
Recurso estimación	10	13	15
Sanciones	1	3	13



Además, y tal y como se recoge en la página 15 del informe, la SGIPE prepara un listado con todos los DNI de las personas en edad laboral de los expedientes activos y se envía a la Seguridad Social. Este organismo devuelve un fichero con las altas laborales del mes solicitado. En la SGIPE se comprueba si las altas laborales estaban notificadas para en su caso proceder a la baja, suspensión cautelar, etc. Además este mismo listado se envía al Observatorio de la Realidad social para conocer la situación de demanda de empleo de todas las personas en edad laboral.

Quinta.- En la pág. 20 se menciona que "la SGIPE no lleva un control que permita conocer en un momento dado la situación en la que se encuentran los expedientes enviados a inspección". La SGIPE **sí que lleva** un control específico en la unidad de red tal y como se muestra en la imagen siguiente, de modo que se conoce perfectamente que expedientes son remitidos y cuales son recibidos:



Apartado IV.6. Conclusión final y recomendaciones

Sexta.- Respecto a la recomendación segunda (pág. 29), es decir "Cumplimentar adecuadamente toda la documentación [...]", si bien se están ya implantando mecanismos que mejoran la correcta y adecuada tramitación de las solicitudes desde los SSB, en particular la modificación y extensión de TRAMIT@, no se comparte esta recomendación por ser contraria a lo previsto en el procedimiento administrativo ordinario, es decir, toda solicitud es objeto de subsanación si contiene errores y en caso de no subsanar se debe proceder a su archivo en los términos que la normativa vigente exige. Por tanto, una cuestión es adoptar medias para la mejora de las solicitudes y otra es obviar los derechos ciudadanos a la subsanación, que es una obligación para la administración

Séptima.- Respecto a la recomendación sexta (pág. 30), es decir "Realizar un seguimiento de los expediente que se envía a la sección de inspección [...]", por las razones expuestas en la alegación quinta, se considera que no procede.



Octava.- Respecto a la recomendación undécima (pág. 30), es decir "Potenciar políticas de empleo [...], se considera oportuno reformular esta recomendación en términos de mejora de las actuaciones que ya se están realizando, puesto que el Departamento de Derechos Sociales bien a través de las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare (SNE – NL), organismo autónomo adscrito a este Departamento, como por lo previsto y en ejecución dentro del Plan Estratégico de Inclusión Social, se puede decir que esas políticas ya están implementadas, tal y como se recogen a continuación:

<u>Actuaciones del SNE - NL</u>, cabe destacar las Políticas Activas de Empleo (Documento de Políticas Activas de Empleo aprobado en 2017), cuyo objetivo se centra en *"Favorecer la inserción y garantizar la igualdad de oportunidades" y* se contemplan las medidas siguientes:

- Promoción del empleo de personas con discapacidad:
 - Ayudas a la contratación de las personas con discapacidad que trabajan en los centros especiales de empleo subvencionando sus costes salariales, ayudas para unidades de apoyo que intensifiquen el seguimiento de la actividad desarrollada por los centros, y medidas de fomento de la inversión;
 - o Medidas de fomento de la contratación en empresas de personas con discapacidad.
- Promoción del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión:
 - Ayudas a la contratación en Empresas de inserción a través de subvenciones a los costes salariales y de seguridad social y a la inversión,
 - Subvenciones a las entidades locales para el fomento de la contratación de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión.
 - o Medidas de inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de contratación pública;
- Medidas de impulso al empleo Juvenil:
 - Acciones específicas de orientación, formación emprendimiento y fomento de la contratación;
 - o Programa de garantía Juvenil-programa de economía social para empleo juvenil
 - o Fomento del emprendimiento entre la población joven
 - o Programa EURES de movilidad de la población joven en Europa
 - Medidas de mejora de la cualificación profesional de las personas jóvenes en situación de desempleo o empleo en precario con déficits formativos y baja cualificación.
- Actuaciones dirigidas a personas desempleadas de larga duración y de muy larga duración:
 - Programa de atención conjunto desde el ámbito de políticas sociales y de empleo para la mejora de la atención a personas desempleadas de larga duración
 - Medidas específicas dirigidas a personas desempleadas mayores de 50 años, intensificando su empleabilidad e inserción
 - Programas específicos que desarrollen medidas para mayores de 55 años: itinerarios de empleabilidad, experiencias piloto similares al empleo social con apoyo de Entidades Locales, compromisos con empresas y organizaciones para cubrir vacantes, entre otras.
 - Nueva medida experimental para la contratación de personas en desempleo destinada a determinados trabajos auxiliares para la Administración Pública
- Actuaciones dirigidas a personas perceptoras de Renta de Inserción Social o Renta Garantizada:
 - Medidas de fomento de la contratación por empresas, entidades locales o entidades sociales;



- o Programas de orientación personalizada y especializada;
- Medidas de coordinación de Servicios de Empleo con Servicios Sociales.
- Medidas de igualdad de género y medidas antidiscriminación:
 - o Estudio sobre discriminación laboral, medidas de difusión,
 - o Medidas relacionas con el Plan de trabajo autónomo,
 - o Medidas de fomento de igualdad de trato a las mujeres en las convocatorias.

<u>Plan Estratégico de inclusión Social</u>. El mismo prevé entre sus líneas estratégicas clave para la lucha contra los procesos de exclusión, la activación laboral, recogiendo las actuaciones que ya se vienen realizando de impulso de diversas acciones para el apoyo a la integración laboral de colectivos con mayores dificultades; en concreto las siguientes actuaciones:

- Contratos de servicios de incorporación sociolaboral (EISOL): Implantados en todas las áreas de servicios sociales, su objeto es fomentar el desarrollo de proyectos integrados, posibilitando el diseño conjunto con los SSB de una serie de acciones que contribuyan a configurar un itinerario de incorporación social.
- Empleo social protegido (ESP): Dirigido al impulso de proyectos de interés colectivo y no lucrativo promovidos por entidades locales que impliquen la contratación temporal de personas en situación de exclusión social y que precisen de acompañamiento social para llevar a cabo un itinerario de inclusión que mejore sus posibilidades de incorporación socio laboral.
- Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales: Dirigidos a subvencionar proyectos cuyo objeto sea el desarrollo de itinerarios de empleabilidad para personas en situación o riesgo de exclusión o la contratación de personas en situación de exclusión
- Subvención al programa Acceder: Fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de la mejora de oportunidades de integración de las personas gitanas en situación de exclusión del mercado laboral.

En Pamplona, a 3 de abril de 2019

La Directora General de Inclusión y

Protección Social

El Consejero de Derechos Sociales

MAÑU Firmado digitalmente por ECHAIDE MAÑU ECHAIDE GEMA - DNI 33415445X

GEMA - DNI 33415445X 33415445X Fecha: 2019.04.03 13:00:25 +02'00'

Gema Mañú Echaide

Firmado por LAPARRA NAVARRO MIGUEL - DNI 72665120R el día 03/04/2019 con un certificado emitido por AC Administración Pública

Miguel Laparra Navarro



Contestación a las alegaciones presentadas al informe provisional

Agradecemos al Consejero de Derechos Sociales y a la Directora General de Inclusión y Protección Social las alegaciones presentadas. Estas alegaciones se incorporan al informe provisional y se eleva este a definitivo al considerar que constituyen una explicación de la fiscalización realizada y no alteran su contenido, a excepción de la inclusión de un párrafo en la página 6 y la supresión de otro en la pág. 12, según lo indicado en las alegaciones segunda y tercera.

En relación al contenido de la alegación quinta, reiteramos que no se lleva un control específico de los expedientes enviados a la sección de inspección, sin perjuicio de que la sección de garantía de ingresos y prestaciones económicas tenga conocimiento de los oficios trasladados y los informes recibidos desde inspección.

Pamplona, 4 de abril de 2019 La presidenta, Asunción Olaechea Estanga

